

**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
[MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL]**

Solicitud de Cooperación Jurídica en Materia Penal Colombia/Brasil
Autoridad solicitante: Fiscalía General de la Nación
Caso Lava Jato - Subcaso Odebrecht
PCI n. 1.00.000.019188/2018-41
Objeto: Testimonios de Luiz Antonio BuenoJunior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo Rocha Soares
Expediente nº 1100160000101201600156

**ACUERDO DE COMPROMISO DE ESPECIALIDAD Y DE LIMITACIÓN DEL USO
DE PRUEBAS**

La Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra la Corrupción, órgano competente para la investigación y el proceso penal y la Fiscalía General de la Nación, autoridad central colombiana, competente para la cooperación jurídica internacional en materia penal en el marco del Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la Republica de Colombia y la Republica Federativa de Brasil, para la realización de las diligencias rogadas, y con el fin de recibir los documentos que serán enviados por la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) de la Fiscalía General de la República Federativa del Brasil, en cumplimiento de la solicitud de asistencia jurídica internacional arriba identificada, asumen el compromiso en nombre del Estado solicitante de **no utilizarlos** contra los colaboradores **Luiz Antonio BuenoJunior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo Rocha Soares**, contra cualquiera de las empresas del **GRUPO ODEBRECHT y BRASKEM** o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal brasileño;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
[MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL]**

que haya firmado acuerdos de declaración de culpabilidad negociada en el marco del caso Lava Jato y/o terceros empleados y/o ex empleados de ODEBRECHT que se adhieran al Acuerdo de clemencia celebrado entre Odebrecht SA y el Ministerio Público Federal - MPF el 1 de diciembre de 2016 y homologado ante los juicios competentes, para instruir acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción.

A este fin, y considerando que los colaboradores renunciaron a su derecho al silencio y a la garantía contra la autoincriminación a cambio de beneficios legales y de limitación de responsabilidad penal ya ajustados en la jurisdicción brasileña, las autoridades signatarias declaran tener competencia para asumir los compromisos constantes del presente acuerdo de compromiso, obligándose, en nombre del Estado solicitante, a **observar y cumplir** los artículos 32¹ y 37² de la Convención de Naciones

1Art. 32. Protección a testigos, expertos y víctimas.

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y los expertos que presten testimonio sobre los delitos calificados de acuerdo con la presente, así como, cuando proceda, a sus familiares y las demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluyendo el derecho de garantías procesales, en:

a) Establecer los procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida necesaria y lo posible, su remoción, y permitir, cuando proceda, a la prohibición total o parcial de revelar la información sobre su identidad y su paradero;

b) Establecer las normas probatorias que permitan a los testigos y expertos testimoniar sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados con otros Estados para la remoción de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

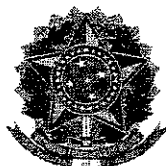
4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su legislación interna, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las acciones penales contra los criminales sin menospreciar los derechos de defensa.

2Art. 37. Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas apropiadas para restablecer las personas que participen o hayan participado en la práctica de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines de investigación y probatorios y las que les presten ayuda efectiva y que pueda contribuir a privar a los criminales del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la disminución de la pena de toda persona acusada que preste una cooperación sustancial a la investigación o al indiciamiento de los delitos calificados de



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
[MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL]**

Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), especialmente los párrafos 2, 3, 4 y 5 del art. 37 que permiten al Estado solicitante condicionar el acceso a pruebas derivadas de acuerdos de clemencia y de acuerdos de declaración de culpabilidad negociada a la garantía de que los colaboradores del Ministerio Público Federal de la República Federativa del Brasil, en el caso Lava Jato, sean personas físicas o jurídicas, no serán procesados civilmente, administrativamente o criminalmente en esas jurisdicciones por los hechos revelados y los documentos proporcionados voluntariamente a las autoridades brasileñas, así como por las pruebas derivadas de dichos hechos y documentos.

Se comprometen también a las autoridades signatarias en nombre del Estado solicitante y conforme a la praxis internacional a **respetar el principio de especialidad, sobre la limitación del uso de la prueba**, que es objeto de los siguientes dispositivos de tratados internacionales, sin perjuicio de otros que sean aplicables a los Estados Partes:

a) Artículos 5.3 e 8.4 del Acuerdo de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la Republica de Colombia y la Republica Federativa de Brasil;³

acuerdo con la presente Convención.

3. Cada Estado parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su legislación interna, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste una cooperación sustancial en la investigación o en la inculpación de los delitos calificados de conformidad con la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, *mutatis mutandis*, la prevista en el Artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar una cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Partes interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o tratados de conformidad con su legislación con respecto a la eventual concesión, por ese Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

3 Artículo 5. Denegación de Asistencia

3. La Autoridad Competente de la Parte Requerida podrá denegar, condicionar o diferir el cumplimiento de la solicitud, cuando se considere que obstaculiza un procedimiento penal en curso en su territorio.

Sobre esas condiciones la Parte Requerida consultará a la Parte Requirente por intermedio de las Autoridades Centrales. Si la Parte Requirente acepta la asistencia condicionada, la solicitud será cumplida de conformidad con la manera propuesta.

Art. 8°. Confidencialidad y Limitaciones en el Empleo de la Información

4. Salvo autorización previa de la Parte Requerida, la parte Requirente solamente podrá emplear la información



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
[MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL]**

b) Artículos 46.2, 46.5, 46.17 y 46.19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, concluida en Mérida en 2003;⁴

c) Artículo .25, primera parte, de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, concluida en Nassau, en 1992;⁵

Por último, se obligan en nombre del Estado solicitante a no transferir o entregar de cualquier modo a otras instituciones nacionales, organizaciones internacionales o a terceros países, las pruebas a que se refiere este acuerdo de compromiso, sin previa y expresa autorización de la Secretaría de Cooperación Internacional (SCI) de la Fiscalía General de la República y del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de la República Federativa del Brasil (DRCI).

o la prueba obtenida en virtud del presente Acuerdo en la investigación o procedimiento indicado en la solicitud.

4 Art. 46. Asistencia Judicial Recíproca

Art. 46.2. Se prestará asistencia judicial recíproca en el mayor grado posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y declaraciones pertinentes del Estado Parte solicitado en relación con las investigaciones, los procesos y las acciones judiciales relacionadas con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado Parte solicitante.

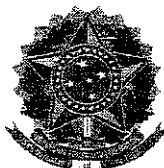
5. La transmisión de información de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y los procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitaron la información. Las autoridades competentes que reciban la información deberán acoger a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte solicitado y, en la medida en que no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

19. El Estado Parte solicitante no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte solicitado, la información o las pruebas proporcionadas por éste para las investigaciones, los procesos o las acciones judiciales distintas de las indicadas en la solicitud.

5 "Artículo 25 Limitación del uso de la información o pruebas

El Estado solicitante no podrá divulgar ni utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de esta Convención para propósitos distintos de los indicados en la solicitud de asistencia, sin previo consentimiento de la Autoridad Central del Estado solicitado."



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
[MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL]**

Se declaran conscientes de que las condiciones o las limitaciones de uso aquí fijadas se justifican aún porque, en los términos de los tratados, el Estado brasileño puede denegar asistencia o recusarse a compartir pruebas que puedan ser usadas contra colaboradores de la Justicia, o puede limitarse su uso, cuando tales pruebas se entreguen en atención a solicitudes de cooperación jurídica internacional, y siempre que sea necesario para evitar ofensas al principio de buena fe,⁶ a la legalidad y al orden público, los preceptos previstos en los tratados y en los arts. 5 y 39 del Código de Proceso Civil (CPC) brasileño,⁷ en lo que se refiere al derecho de defensa, a la garantía del debido⁸ y a la regla *non bis in idem*.

_____ de _____ de 2018.

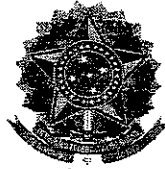
POR LA AUTORIDAD CENTRAL EXTRANJERA:

POR LA AUTORIDAD DE INVESTIGACIÓN EXTRANJERA:

⁶ CPC, art. 5º. El que de cualquier forma participa en el proceso debe comportarse de acuerdo con la buena fe.

⁷CPC, art. 39. "La solicitud pasiva de cooperación jurídica internacional será rechazada si configura manifiesta ofensa al orden público".

⁸CPC, art. 26. La cooperación jurídica internacional se regirá por el tratado de que Brasil forma parte y observará:
- el respeto a las garantías del debido proceso legal en el Estado solicitante;



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

Pedido de Cooperação Jurídica em Matéria Penal Colômbia/Brasil
Autoridade rogante: Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional da Fiscalía Especializada Contra a Corrupção
Caso Lava Jato - Subcaso Odebrecht
PCI n. 1.00.000.019188/2018-41
Objeto: Depoimentos de Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo Rocha Soares
Expediente nº 1100160000101201600156

**TERMO DE COMPROMISSO DE ESPECIALIDADE E DE LIMITAÇÃO DE USO
DE PROVAS**

A **Fiscalía General de la Nación – Dirección Nacional da Fiscalía Especializada Contra a Corrupção**, órgão competente para a investigação e o processo penal e a **Fiscalía General de la Nación**, autoridade central colombiana, competente para cooperação jurídica internacional em matéria penal no âmbito do Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e a Colômbia, para a realização das diligências rogadas, e a fim de receber os documentos que serão enviados pela Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República Federativa do Brasil, em cumprimento ao pedido de assistência jurídica internacional acima identificado, assumem o compromisso em nome do Estado rogante de **não os utilizar** contra os colaboradores **Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri e Luiz Eduardo Rocha Soares**, contra qualquer das empresas do **GRUPO**



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

ODEBRECHT e BRASKEM ou contra qualquer outro colaborador do Ministério Público Federal brasileiro, que tenha firmado acordos de colaboração premiada no âmbito do caso Lava Jato e/ou terceiros empregados e/ou ex-empregados da ODEBRECHT que venham a aderir ao Acordo de Leniência celebrado entre a Odebrecht S.A. e o Ministério Público Federal – MPF em 1º de dezembro de 2016 e homologado perante os juízos competentes seja para instruir ações penais, ações cíveis ou processos administrativos em sua jurisdição.

Para este fim, e considerando que os colaboradores renunciaram ao seu direito ao silêncio e à garantia contra a autoincriminação em troca de benefícios legais e limitação de responsabilidade penal já ajustados na jurisdição brasileira, as autoridade signatárias declaram ter competência para assumir os compromissos constantes do presente Termo de Compromisso, obrigando-se, em nome do Estado rogante, a **observar e cumprir** os artigos 32¹ e 37² da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção

1 Art. 32. Proteção a testemunhas, peritos e vítimas

1. Cada Estado Parte adotará medidas apropriadas, em conformidade com seu ordenamento jurídico interno e dentro de suas possibilidades, para proteger de maneira eficaz contra eventuais atos de represália ou intimidação as testemunhas e peritos que prestem testemunho sobre os delitos qualificados de acordo com a presente Convenção, assim como, quando proceder, a seus familiares e demais pessoas próximas.

2. As medidas previstas no parágrafo 1 do presente Artigo poderão consistir, entre outras, sem prejuízo dos direitos do acusado e incluindo o direito de garantias processuais, em:

a) Estabelecer procedimentos para a proteção física dessas pessoas, incluída, na medida do necessário e do possível, sua remoção, e permitir, quando proceder, a proibição total ou parcial de revelar informação sobre sua identidade e paradeiro;

b) Estabelecer normas probatórias que permitam que as testemunhas e peritos prestem testemunho sem pôr em perigo a segurança dessas pessoas, por exemplo, aceitando o testemunho mediante tecnologias de comunicação como a videoconferência ou outros meios adequados.

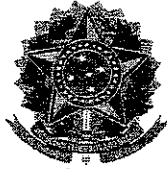
3. Os Estados Partes considerarão a possibilidade de celebrar acordos ou tratados com outros Estados para a remoção das pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo.

4. As disposições do presente Artigo se aplicarão também às vítimas na medida em que sejam testemunhas.

5. Cada Estado Parte permitirá, com sujeição a sua legislação interna, que se apresentem e considerem as opiniões e preocupações das vítimas em etapas apropriadas das ações penais contra os criminosos sem menosprezar os direitos de defesa.

2 Art. 37. Cooperação com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei

1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas que participem ou que tenham participado na prática dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito, assim como recuperar esse produto.



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

(Convenção de Mérida), especialmente os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do art. 37, que permitem ao Estado rogado condicionar o acesso a provas derivadas de acordos de leniência e de acordos de colaboração premiada à garantia de que os colaboradores do Ministério Público Federal da República Federativa do Brasil, no caso Lava Jato, sejam pessoas físicas ou jurídicas, não serão processados civil, administrativa ou criminalmente nessas jurisdições pelos fatos revelados e documentos fornecidos voluntariamente às autoridades brasileiras, assim como pelas provas derivadas dos referidos fatos e documentos.

Comprometem-se ainda as autoridades signatárias em nome do Estado rogante e conforme a praxe internacional a **respeitar o princípio da especialidade, sobre limitação do uso da prova**, que é objeto dos seguintes dispositivos de tratados internacionais, sem prejuízo de outros que sejam aplicáveis aos Estados Partes:

a) art. 5.3 e 8.4 do Acordo de Cooperação Judiciária e Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil e a Colômbia³;

2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a mitigação de pena de toda pessoa acusada que preste cooperação substancial à investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção.

3. Cada Estado parte considerará a possibilidade de prever, em conformidade com os princípios fundamentais de sua legislação interna, a concessão de imunidade judicial a toda pessoa que preste cooperação substancial na investigação ou no indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente Convenção.

4. A proteção dessas pessoas será, *mutatis mutandis*, a prevista no Artigo 32 da presente Convenção.

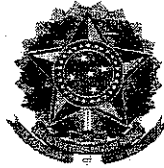
5. Quando as pessoas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo se encontrem em um Estado Parte e possam prestar cooperação substancial às autoridades competentes de outro Estado Parte, os Estados Partes interessados poderão considerar a possibilidade de celebrar acordos ou tratados, em conformidade com sua legislação interna, a respeito da eventual concessão, por esse Estado Parte, do trato previsto nos parágrafos 2 e 3 do presente Artigo.

3 Artigo 5º. Denegação da assistência

3. A Autoridade Competente da Parte Requerida poderá denegar, condicionar ou diferir o cumprimento do pedido, quando considerar que constitui obstáculo a um processo penal em curso no seu território. Sobre essas condições a Parte Requerida consultará a Parte Requerente por intermédio das Autoridades Centrais. Se a Parte Requerente aceita a assistência condicionada, o pedido será atendido de acordo com as condições apresentadas.

Artigo 8º Confidencialidade e Limitações ao Uso da Informação

4. Somente com autorização prévia da Parte Requerida, a Parte Requerente poderá empregar a informação ou a prova obtida em virtude do presente Acordo na investigação ou procedimento indicado no pedido.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

b) arts. 46.2, 46.5, 46.17 e 46.19 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, concluída em Mérida em 2003;⁴

c) art. 25, primeira parte, da Convenção Interamericana sobre Assistência Mútua em Matéria Penal, concluída em Nassau, em 1992;⁵

Por fim, obrigam-se em nome do Estado rogante a não transferir ou entregar por qualquer modo a outras instituições nacionais, organizações internacionais ou a terceiros países, as provas a que se refere este termo de compromisso, sem prévia e expressa autorização da Secretaria de Cooperação Internacional (SCI) da Procuradoria-Geral da República e do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública da República Federativa do Brasil (DRCI).

Declaram-se cientes de que as condições ou limitações de uso aqui

4 Art. 46. Assistência Judicial Recíproca

2. Prestar-se-á assistência judicial recíproca no maior grau possível conforme as leis, tratados, acordos e declarações pertinentes do Estado Parte requerido com relação a investigações, processos e ações judiciais relacionados com os delitos dos quais uma pessoa jurídica pode ser considerada responsável em conformidade com o Artigo 26 da presente Convenção no Estado Parte requerente.

5. A transmissão de informação de acordo com o parágrafo 4 do presente Artigo se fará sem prejuízo às indagações e processos penais que tenham lugar no Estado das autoridades competentes que facilitaram a informação. As autoridades competentes que recebem a informação deverão aquiescer a toda solicitação de que se respeite seu caráter confidencial, inclusive temporariamente, ou de que se imponham restrições a sua utilização.

17. Dar-se-á cumprimento a toda solicitação de acordo com o ordenamento jurídico interno do Estado Parte requerido e, na medida em que ele não o contravenha e seja factível, em conformidade com os procedimentos especificados na solicitação.

19. O Estado Parte requerente não transmitirá nem utilizará, sem prévio consentimento do Estado Parte requerido, a informação ou as provas proporcionadas por este para investigações, processos ou ações judiciais distintas daquelas indicadas na solicitação.

5 "Artigo 25 Limitação do Uso da Informação ou Provas

O Estado requerente não poderá divulgar nem utilizar nenhuma informação ou prova obtida em aplicação desta Convenção para propósitos diferentes dos indicados no pedido de assistência, sem prévio consentimento da Autoridade Central do Estado requerido."



**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL**

fixadas justificam-se ainda porque, nos termos dos tratados, o Estado brasileiro pode denegar assistência ou recusar-se a compartilhar provas que possam ser usadas contra colaboradores da Justiça, ou pode limitar o seu uso, quando tais provas são entregues em atendimento a pedidos de cooperação jurídica internacional, e sempre que isto seja necessário para evitar ofensas ao princípio da boa-fé,⁶ à legalidade e à ordem pública, preceitos previstos nos tratados e nos arts. 5º e 39 do Código de Processo Civil (CPC) brasileiro,⁷ no que diz respeito aos direitos de defesa, à garantia do devido processo legal⁸ e à regra *non bis in idem*.

_____ de _____ de 2018.

PELA AUTORIDADE CENTRAL ESTRANGEIRA:

PELA AUTORIDADE INVESTIGATIVA ESTRANGEIRA:

6 CPC, art. 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

7 CPC, art. 39. "O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública".

8 CPC, art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:
I - o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente;